

# Arturo Fernández

## Las elecciones del 28 de junio: cuatro meses después

### Arturo Fernández

Politólogo. Investigador Conicet, Universidad Nacional de San Martín y Universidad de Buenos Aires

Las elecciones legislativas del pasado 28 de junio tuvieron diversas interpretaciones derivadas de un contexto social y político polarizado que se remonta a los inicios de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.

Partiendo de un análisis formal de los resultados generales tanto como distritales, observamos que la ciudadanía quiso redistribuir el ejercicio del poder entre diversos actores sin inclinarse por ninguno de ellos. Esto, en el marco de la crisis de partidos iniciada en 2002, hará seguramente más complicada una reorganización política basada en un polo de centroizquierda, liderado por el ex-presidente Néstor Kirchner y otro de centroderecha, dado el relativo debilitamiento del kirchnerismo como de la menguada *performance* del macrismo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En realidad, este proyecto del gobierno nacional -que no pudo consolidarse en las elecciones anteriores-, naufragó definitivamente al diluirse la Concertación Plural del peronismo K con sectores del radicalismo, a partir del voto "no positivo" del vicepresidente Julio Cobos y de su singular pasaje a la oposición.

La consecuencia de este panorama partidario se refleja en el proyecto de reforma política del Poder Ejecutivo que propone elecciones internas abiertas, simultáneas y obligatorias, con la intención de favorecer la reconstitución de los partidos históricos, especialmente el radicalismo y el peronismo, y de eliminar la multitud de pequeños partidos que expresan la atomización creciente de la sociedad.

De todas formas, las manifestaciones políticas de los conflictos que atraviesan la sociedad argentina son la punta de un *iceberg* socio-económico complejo y difícil de desentrañar. A menudo los políticos no han podido canalizar dichos conflictos durante el siglo pasado y ahora es una incógnita si lo podrán hacer. Se hace digno de mención, sin embargo, que durante la campaña y después de las elecciones, casi todos los principales dirigentes hayan manifestado una voluntad de negociación y de respeto por las formas institucionales, con la lamentable excepción de la Dra. Carrió y una parte minoritaria de sus seguidores, surgidos de las tinieblas antiperonistas de los años cincuenta.

Por su parte, el gobierno de Cristina Fernández supo reponerse de las vacilaciones del año 2008 y de la derrota electoral del 28 de junio, realizando una parte de su programa reformador a través de la mayoría parlamentaria que conservará hasta el 11 de diciembre próximo, sentando a la vez algunas bases de estabilidad social y política que le permitirán completar su mandato y restablecer un ordenamiento político viable. Sus formas son enérgicas y decisionistas, pero sin ellas, el país se hundiría en la anarquía.

¿Qué fuerzas conducen hacia la desintegración social? Viejos y nuevos grupos de poder incapaces de hacer concesiones que limiten sus privilegios y cuya disputa "todos contra todos" se vivió en 2001 y 2002. Su iracundia se expresa a través de los medios de comunicación afines a *La Nación* y al grupo multimedia *Clarín* y de una cantidad de periodistas, analistas políticos e intelectuales orgánicos cercanos a esos grupos de poder, sea por convicción o por interés particular. Tulio Halperín Donghi ha descrito en sus recientes memorias<sup>1</sup> la génesis, desarrollo y consecuencias de la ideología "republicana, democrática y antipopular" que rechazó el proyecto de justicia social del "peronismo plebeyo" y que reapareció con mucha fuerza en 2008. El gran historiador argentino devela las raíces de dicho proceso pero

sigue responsabilizando al justicialismo por su incapacidad de institucionalizar lo que él llama reiteradamente “revolución social” ¡Suenan algo contradictorio...!

En 2003 se trató de hacer algo más modesto, pues el gobierno del presidente Néstor Kirchner debía restaurar la autoridad del Estado Federal a través de su reconstrucción jurídica, social y política:

- En primer lugar, reparando el Estado de Derecho a través de la renovación de la Corte Suprema y la Justicia Federal, y juzgando los crímenes de lesa humanidad imprescriptibles.

Se trata de un proyecto a largo plazo. El grado de deterioro del cuerpo judicial es tan grave que sólo nuevas generaciones de abogados podrán renovar el Estado de Derecho abyectamente destruido por la dictadura de 1976 a 1983. Sólo así se explica que el juicio del caso “ESMA” todavía no haya sido concluido. Sectores de juristas nostálgicos del proyecto autoritario de la “nación católica” tratan de impedir cualquier cambio en los mecanismos judiciales y en sus concepciones, apoyados por su soporte ideológico, la Iglesia Católica. La propaganda de reconciliación nacional y amnistía general tiene este origen y pretende descalificar a los organismos de derechos humanos, utilizando errores políticos de algunos de ellos.

- En segundo lugar, conformando una coalición económico-social que apoyase un tipo de cambio elevado para proteger la producción nacional, generar empleo, mejorar salarios y acuerdos de precios.

Esta coalición conformada por la gestión del ministro Lavagna, pudo haber sucumbido en las elecciones de 2003, pero sobrevivió gracias al *ba-llotage* y a la impopularidad del ex presidente Me-nem (aún así los votos que recogieron los partidarios de una “economía abierta” superaron el 40%). Todos los intentos para lograr un acuerdo económico-social de fondo, realizados durante la presidencia de Duhalde, fracasaron. Por lo tanto, Kirchner adoptó una opción económica sostenida sólo por la Unión Industrial Argentina, la CGT y la Federación Agraria Argentina. El *boom* de las exportaciones agrícolas consolidó la coalición y ello permitió al gobierno negociar una desmesurada quita de la deuda pública con bastante éxito. Sin embargo, los acuerdos de precios pactados comenzaron a hacer agua en 2006 por presiones de los productores agropecuarios y de los industriales.

Por su parte, una política laboral progresista res-

tableció la negociación colectiva, mejoró el salario mínimo y fortaleció la acción sindical. El empresario, el gran ganador económico de los años de crecimiento al 8% o 9% del PBI, comenzó a transferir los costos sociales a los precios y desató la inflación. Peor aún, no aceptó un pacto inflacionario al estilo de los años '60 (15%-20% anual). En 2007 el gobierno intervino el INDEC como muestra de su impotencia frente a los factores de poder real, y su política de subsidios cruzados postergó el ajuste de tarifas sin calmar las presiones de las empresas privatizadas.

La candidata Cristina Fernández promovía un acuerdo social pero apenas asumió, las presiones socio-económicas se multiplicaron y comienza a pronosticarse la endeblez del sector externo, frente a los pagos de la deuda para el 2009. El riesgo-país crece y se desata el conflicto con el “campo”, en el cual la Federación Agraria Argentina se alía con la Sociedad Rural Argentina. Algunos de los grupos industriales más poderosos, afectados por la crisis financiera mundial, demandaron una apertura económica que eliminaría miles de empresas pequeñas y medianas reabiertas después de la devaluación de 2002.

Un gobierno enfrentado a oposiciones contradictorias y con una base social estrecha y dividida intentó utilizar las elecciones legislativas para reforzar su legitimidad y relativamente fracasó: dos tercios del electorado no lo apoyaron aunque las fuerzas de la oposición no representaron un bloque social alternativo.

Ello le permitió a la Presidenta recuperar la iniciativa política. La CGT dividida, una parte de la CTA y un sector de movimientos sociales fueron el apoyo más directo al kirchnerismo.

- En tercer lugar, revirtiendo la política externa de “relaciones carnales” con Estados Unidos sin adoptar una posición de enfrentamiento, con cancilleres de estilos distintos. El kirchnerismo se mantiene equidistante de los tres líderes reformadores más radicales (Chávez, Correa y Morales) y de los más moderados (Lula, Bachelet y Lugo). Es evidente que las relaciones exteriores expresan los intereses de las bases sociales de cada gobierno, y ello condiciona a unos y a otros. Ubicado en un bloque de Jefes de Estado que pretenden remediar una letal desigualdad social, el gobierno de Cristina Fernández ha recibido el mensaje del golpe de Honduras, quizás no fomentado por Estados Unidos pero tolerado por una OEA impotente y por el “Gran Vecino”, dubitativo de enfrentarse con sus más fieles aliados locales.

En este sentido es que preocupan las expresiones de odio social de los sectores más concentrados de poder en cualquier país de la región. Ellos rechazan de plano cualquier tibia reforma, tal como las que intentara uno de los suyos, el presidente Zelaya en Tegucigalpa. No lo mataron de casualidad y lo deben lamentar. En conclusión, ha aparecido la figura del golpe militar correctivo sin dictador, para “restablecer el orden”.

Es difícil no homologar esta situación con la que vive la Argentina, corroída por la corrupción estructural preexistente al gobierno actual. Se denuncia falta de libertad de prensa donde diariamente se injuria y calumnia a las autoridades políticas desde medios escritos y audiovisuales. Se demanda por esos mismos canales de expresión, exterminar “hordas” de menores delincuentes y ex-presos liberados por jueces garantistas. Se condena la actitud, iniciada por el ex presidente Duhalde, de no reprimir la protesta callejera de sindicalistas y movimientos sociales, movilizadas por una puja distributiva altamente explicable, dado el indignante nivel de desigualdad social. Como en épocas desconocidas para las jóvenes generaciones, se fomenta el desprecio a los gobernantes, acusados por sus negociados o por su incapacidad o falta de autoridad; así fueron derrocados Yrigoyen, Perón, Frondizi e Illia, todos atacados por el poder económico y la Iglesia Católica, y vituperados e ignorados por una intelectualidad extranjerizante y caprichosa.

El balance de los gobiernos de “los Kirchner” no puede hacerse aún. Sólo cabe afirmar que sus enemigos viscerales son los sectores reaccionarios y conservadores que han destruido la Argentina en el siglo XX y que arrastran tras sí, con mucha habilidad, sectores medios y hasta populares. En algunos casos sus voceros son viejos golpistas como Mariano Grondona. Lo más probable es que “la condena” hacia el matrimonio que vino de Santa Cruz sea por algunos proyectos positivos que pusieron en marcha.

En América Latina el odio de “los de arriba” ha sido el motor de la historia y ha estado siempre dirigido a mantener sus incalculables privilegios.